

Sesión: Décima Octava Extraordinaria
Fecha: 12 de septiembre de 2017
Orden del día: Punto ocho

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA**

Décima Octava Sesión Extraordinaria del 12 de septiembre de 2017.

ACUERDO N°. IEEM/CT/048/2017

DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 92, FRACCIONES XI Y XXIX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

RAZÓN.- Toluca de Lerdo, Estado de México a 12 de septiembre de 2017, los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de México; Mtro. Francisco Javier López Corral, Titular de la Unidad de Transparencia y Presidente del Comité de Transparencia; Mtro. Jesús Antonio Tobías Cruz, Contralor General e Integrante del Comité de Transparencia y Mtra. Lilibeth Álvarez Rodríguez, Servidora Pública Electoral, adscrita a la Oficina de la Presidencia del Consejo General e Integrante del Comité de Transparencia; así como con la participación del Lic. Luis Enrique Fuentes Tavira, Subdirector de Datos Personales, Transparencia y Acceso a la Información, en su calidad de Responsable de datos personales, en desahogo del punto número ocho del orden del día, correspondiente a la Décima Octava Sesión Extraordinaria de la misma fecha, dan cuenta de la solicitud de clasificación de información confidencial realizada por el Servidor Público Habilitado de la Dirección de Administración, para dar cumplimiento a la publicación de las Obligaciones de Transparencia, establecidas en el artículo 92, fracciones XI y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de conformidad con los Antecedentes y Considerandos que se exponen a continuación: -----

ANTECEDENTES

I. Con fecha 7 de septiembre de 2017, la Dirección de Administración solicitó vía correo electrónico a la Unidad de Transparencia, someter a consideración del

Comité de Transparencia, la clasificación de los datos personales confidenciales contenidos en los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos por el Instituto Electoral del Estado de México con particulares durante el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, así como los contratos de los procedimientos adquisitivos suscritos por el Instituto Electoral del Estado de México con proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a lo siguiente:

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Toluca, Estado de México, a 7 de septiembre de 2017

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción V, 122 y 132 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se solicita atentamente a la Unidad de Transparencia, someter a la consideración del Comité de Transparencia, la aprobación de la clasificación de la información/documentación solicitada, de conformidad con lo siguiente:

Área solicitante: Dirección de Administración.

Información: Lo correspondiente al artículo 92, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus Municipios.

Modalidad de entrega solicitada: Sistema de difusión de información pública de oficio del INFOEM

Fecha estimada de respuesta: Septiembre, 2017

Solicitud:	Aprobar las versiones públicas de la información requerida por la fracción XI del artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus Municipios, relativa a la publicación de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, en la que se señalen los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Documentos que dan respuesta a la solicitud:	Contratos de prestación de servicios profesionales suscritos por el Instituto Electoral del Estado de México con particulares durante el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete.
Partes o secciones clasificadas:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lugar de nacimiento ▪ Edad ▪ Nacionalidad ▪ Domicilio particular ▪ Registro Federal de Contribuyentes
Tipo de clasificación:	Confidencial.
Fundamento	<ul style="list-style-type: none"> - Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. - Artículo 143, fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios - Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.
Justificación de la clasificación:	Los documentos referidos contienen datos personales que se refieren a la vida privada de los prestadores de servicios, cuya difusión no beneficia a la transparencia ni refleja una rendición de cuentas.
Periodo de reserva	Sin periodo
Justificación del periodo:	Sin periodo

Nota: Esta clasificación cuenta con el visto bueno del titular del área.

Nombre del Servidor Público Habilitado: Lic. José Mondragón Pedrero

Nombre del Servidor Público Enlace: Silvia Melina Gómez Preisser

Nombre del titular del área: Lic. José Mondragón Pedrero

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
Toluca, Estado de México, a 7 de septiembre de 2017

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción V, 122 y 132 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se solicita atentamente a la Unidad de Transparencia, someter a la consideración del Comité de Transparencia, la aprobación de la clasificación de la información/documentación solicitada, de conformidad con lo siguiente:

Área solicitante: Dirección de Administración.

Información: Lo correspondiente al artículo 92, fracciones XXIX a y XXIX b, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus Municipios.

Modalidad de entrega solicitada: Sistema de difusión de información pública de oficio del INFOEM

Fecha estimada de respuesta: Septiembre, 2017

Solicitud:	Aprobar las versiones públicas de la información requerida por las fracciones XXIX a y XXIX b del artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus Municipios, relativa a la publicación de los contratos derivados de Procesos de licitación y contratación y de los Resultados de procedimientos de adjudicación directa, respectivamente. Del 21 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.
Documentos que dan respuesta a la solicitud:	Contratos de procedimientos adquisitivos suscritos por el Instituto Electoral del Estado de México con proveedores y prestadores de servicios.
Partes o secciones clasificadas:	a) Respecto de Personas Físicas <ul style="list-style-type: none"> o Nacionalidad o Número de Acta de Nacimiento o Lugar de Nacimiento o Registro Federal de Contribuyentes o Número de Credencial para Votar, Pasaporte, Cédula Profesional o Cartilla del Servicio Militar o Domicilio Particular b) Respecto de Representantes de Personas Jurídico Colectivas <ul style="list-style-type: none"> o Número de Credencial para Votar, Pasaporte, Cédula Profesional o Cartilla del Servicio Militar
Tipo de clasificación:	Confidencial.
Fundamento	- Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. - Artículo 143, fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios - Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.
Justificación de la clasificación:	Los documentos referidos contienen datos personales que se refieren a la vida privada de proveedores o prestadores de servicios, cuya difusión no beneficia a la transparencia ni refleja una rendición de cuentas.
Periodo de reserva	Sin periodo
Justificación del periodo:	Sin periodo

Nota: Esta clasificación cuenta con el visto bueno del titular del área.

Nombre del Servidor Público Habilitado: Lic. José Mondragón Pedrero

Nombre del Servidor Público Enlace: Silvia Melina Gómez Preisser

Nombre del titular del área: Lic. José Mondragón Pedrero

© 2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917

III. Con base en la petición del Servidor Público Habilitado de la Dirección de Administración, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud de clasificación al Comité de Transparencia, para que se pronuncie y en su caso emita el acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. El Comité de Transparencia es competente para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información, propuesta por los Servidores Públicos Habilitados del Instituto Electoral del Estado de México, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 4 de mayo de 2016, en adelante la Ley de Transparencia del Estado.

SEGUNDO. Los artículos 6°, inciso A), fracciones I y II, así como 16, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que toda la información en posesión de cualquier autoridad, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida. Asimismo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento y que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

Por su parte el artículo 5°, fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, son coincidentes con la Constitución General, en el sentido de la publicidad de toda la información con la única restricción de proteger el interés público, así como la información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, en lo sucesivo la Ley General de Transparencia, en su artículo 116 párrafo primero, dispone que se considera información confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Por su parte la Ley de Transparencia del Estado, es coincidente con la Ley General de Transparencia, toda vez que establece en sus artículos 3° fracciones IX y XX, así como 143, fracción I, que:

Un dato personal es la información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México; sin embargo, esta ley fue abrogada con la publicación de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, en adelante Ley de

Protección de Datos del Estado, el 30 de mayo de 2016, en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno".

Que los datos personales se consideran información confidencial, clasificada de manera permanente, con excepción de aquellos datos que obren en registros públicos o fuentes de acceso público, así como los que, por disposición de la propia ley, sean considerados públicos.

El Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, en adelante los Lineamientos Generales de Clasificación, establecen que son información confidencial los datos personales en términos de la legislación aplicable, para el caso que nos ocupa, son aplicables en la Entidad, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos del Estado.

En este sentido, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, dispone en sus artículos 3º, fracción IX, 4º, 16, 17 y 18 que:

Los datos personales corresponden a las personas físicas;

Esta ley es aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obre en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación;

El responsable del tratamiento de datos personales deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad;

Todo tratamiento deberá sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad le confiera y deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con sus atribuciones legales.

Por su parte, la Ley de Protección de Datos del Estado, refiere en sus artículos 4º, fracción IX, 5º, 15, 22, primer párrafo y 25 que:

Un dato personal es la información concerniente a una persona física identificada o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad;

La presente ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales en posesión de sujetos obligados;

Los responsables en el tratamiento de datos personales, observarán los principios de calidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad y responsabilidad;

Particularmente el principio de finalidad refiere que todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.

El principio de licitud refiere que el tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera.

TERCERO. El Instituto Electoral en su calidad de sujeto obligado de la Ley de Transparencia del Estado, debe cumplir con las obligaciones previstas en la misma, en el caso particular de las obligaciones de transparencia que se encuentran contempladas en el artículo 92, fracciones XI y XXIX, en donde se dispone la publicación de manera permanente y actualizada de los contratos de servicios profesionales por honorarios, así como los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, en donde se incluya versión pública del expediente respectivo y los contratos celebrados.

De tal suerte, para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia antes señaladas es necesario eliminar los datos personales confidenciales, de aquellos proveedores o contratantes que lo hacen en su calidad de personas físicas y elaborar las versiones públicas a incorporarse al sistema electrónico Ipomex.

De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento al artículo 132, fracción III de la Ley de Transparencia del Estado, el Servidor Público Habilitado de la Dirección de Administración, solicitó a la Unidad de Transparencia, someter a consideración del Comité, la clasificación como información confidencial en primer término, respecto de las personas físicas la nacionalidad, número de acta de nacimiento, lugar de nacimiento, Registro Federal de Contribuyentes, número de credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o cartilla del servicio militar y domicilio particular; posteriormente de los representantes de las personas jurídico colectivas el número de credencial para votar, pasaporte, cedula profesional o cartilla del servicio militar, según corresponda, toda vez que esta información aparece de manera

indistinta en los contratos para referir el documento con el que se acredita la identidad de las personas físicas contratantes.

Al respecto, el artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia, determina que los datos personales son información confidencial, situación que es coincidente con la Ley de Transparencia del Estado, por lo que la clasificación se analizará de conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción IX y 143, fracción I de la Ley de Transparencia del Estado, por ser la ley específica, así como por lo dispuesto en el Trigésimo octavo, de los Lineamientos Generales de Clasificación.

De acuerdo con los fundamentos arriba señalados, un dato personal es cualquier información que pueda hacer a un individuo identificado e identificable, como su nombre o imagen. Asimismo, la doctrina desarrollada a nivel internacional, respecto del tema de protección de datos personales, establece que también las preferencias, gustos, cualidades, opiniones y creencias, constituyen este tipo de información. Así, cualquier dato que por sí solo o relacionado con otro, permita hacer identificada o identificable a una persona física, es susceptible de ser clasificado.

En este contexto, la confidencialidad de los datos personales, tiene como propósito establecer el límite del derecho de acceso a la información a partir del derecho a la intimidad y la vida privada de los individuos. Sobre el particular, el legislador realizó un análisis en donde se ponderaban dos derechos: el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales *versus* el interés público de conocer el ejercicio de atribuciones y de recursos públicos de las instituciones y es a partir de ahí, en donde las instituciones públicas deben determinar la publicidad de su información.

De tal suerte, los sujetos obligados tienen la doble responsabilidad, por un lado, de proteger los datos personales y por otro, darles publicidad cuando la relevancia de estos sea de interés público.

En este orden de ideas, toda la información que transparente la gestión pública, favorezca la rendición de cuentas y contribuya a la democratización del Estado Mexicano es, sin excepción, de naturaleza pública; tal es el caso de los salarios de todos los servidores públicos, los montos pagados a proveedores de las instituciones gubernamentales por adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios incluidos los profesionales, la entrega de recursos públicos bajo cualquier esquema, el cumplimiento de requisitos legales, entre otros; información que necesariamente está vinculada con datos personales, que pierden la protección en

beneficio del interés público (no por eso dejan de ser datos personales, sólo que no están protegidos en la confidencialidad).

Dada la complejidad de la información cuando involucra datos personales, pudiera pensarse que se trata de dos derechos en colisión; por un lado, la garantía individual de conocer sobre el ejercicio de atribuciones de servidores públicos así como de recursos públicos y, por el otro, el derecho de las personas a la autodeterminación informativa y el derecho a la vida privada; tratándose de los datos personales que obran en los archivos de las instituciones gubernamentales, la regla es sencilla, ya que aquellos que permiten verificar el desempeño de los servidores públicos y el cumplimiento de obligaciones legales conferidas, transparentan la gestión pública y favorecen la rendición de cuentas, constituyen información de naturaleza pública, en razón de que el beneficio de su publicidad es mayor que el beneficio de su clasificación, aun tratándose de información personal.

Debe tenerse presente que las personas al aceptar una relación comercial, laboral, de servicios, trámites o cualquiera que esta sea, deben aceptar también las disposiciones normativas aplicables, las cuales no sólo se constriñen a la materia del contrato, sino a cumplir con las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas.

Así, las relaciones contractuales implican para los particulares, necesariamente por un tema de interés público, ceder un poco de privacidad a cambio del beneficio de la remuneración económica, de tal forma que la gente en general pueda verificar el debido desempeño de los servidores públicos involucrados en la contratación, la aplicación de la ley y el ejercicio de recursos públicos; sin embargo, para cada caso obliga a realizar un ejercicio de ponderación en donde únicamente se privilegie la publicidad de los datos esenciales para la transparencia y rendición de cuentas, sin afectar la vida privada.

A continuación, se identifican los datos de personas físicas incorporados en los contratos ya referidos, susceptibles de clasificarse:

a) Respecto de las personas físicas:

- Nacionalidad
- Número de acta de nacimiento
- Lugar de nacimiento
- Edad

- Registro Federal de Contribuyentes
- Número de credencial para votar
- Número de pasaporte
- Número de cédula profesional
- Número de la cartilla del servicio militar
- Domicilio particular

b) Respetto de las personas jurídico colectivas:

- número de credencial para votar
- Número de pasaporte
- Número de cedula profesional
- Número de la cartilla del servicio militar

Sobre los contratos y los datos personales contenidos en ellos, conviene precisar que este tipo de documentos no forman parte de sistemas de datos personales; sin embargo, es necesario incluirlos para acreditar la personalidad de los contratantes e identificar los documentos que presentaron, tales como la credencial de elector, el pasaporte o la cartilla del servicio militar.

Ahora bien, independientemente de que los contratos no forman parte de ninguno de los sistemas de datos personales de este Instituto Electoral, toda vez que este Organismo Público Electoral tiene la calidad de sujeto obligado por las leyes de transparencia y las leyes de protección de datos personales; se encuentra constreñido a proteger los datos personales confidenciales, sin importar el tipo de documento en donde obren.

De tal suerte, como se describió anteriormente, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dispone en sus artículos 16, 17 y 18, la obligación de observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad; además de restringir el tratamiento de datos personales a las facultades o atribuciones que la normatividad le confiera y que dicho tratamiento esté justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas.

La Ley de Protección de Datos, refiere en sus artículos 15, 22 y 25 que los responsables en el tratamiento de datos personales deberán observar los principios de licitud, consentimiento, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad; particularmente el principio de finalidad consiste en que todo

tratamiento de datos personales debe estar justificado en ley y el principio de licitud consiste en que la posesión y tratamiento de los sistemas de datos personales, obedecerán exclusivamente a sus atribuciones legales.

De las disposiciones citadas, se corrobora que los servidores públicos deben garantizar la protección de los datos personales, promover medidas de seguridad y observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad.

Aunque los datos personales que obran en los contratos de prestación de servicios profesionales, de adquisición de bienes y prestación de servicios celebrados con personas físicas, no forman parte de un sistema de datos personales, ello no implica de forma alguna, que los datos queden exentos de protección; por el contrario, deben ser protegidos, de ser el caso y, sólo pueden ser tratados de acuerdo con su finalidad, la cual se identifica con verificar la identidad de los contratantes para tener la certeza de que tienen la capacidad legal para celebrar contratos con el Instituto, en términos de los artículos 2.5 Bis y 7.38 del Código Civil del Estado de México, considerando que la personalidad es un *requisito sine qua non* para la validez de un contrato.

CUARTO. En el presente apartado se analizará de manera desglosada la clasificación como información confidencial de cada uno de los datos susceptibles de eliminarse en los contratos de servicios profesionales, de adquisición de bienes, así como de prestación de servicios, celebrados por este Instituto Electoral con personas físicas.

1. Nacionalidad.

De conformidad con el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos refiere que es aquel derecho que vincula al ciudadano con el Estado, haciendo recíproco tanto derechos como obligaciones, siendo ello un atributo de carácter personal que reconoce a una persona como parte de una comunidad frente a su país de residencia y otros Estados.

De lo antes citado podemos decir que la nacionalidad establecida en los contratos es acreditar que el contratante reside en el país, así como de identificar a la persona que presta sus servicios.

De lo anterior podemos decir que, de acuerdo con el principio de finalidad, se trata de un dato personal confidencial del cual procede su eliminación de los contratos.

2. Número de acta de nacimiento

El número de acta de nacimiento es aquel requisito el cual avala el registro del acta de nacimiento, emitido por el registro civil de cada entidad, registrándose los datos de identificación de cada ciudadano, siendo este un número progresivo inherente a cada una de las actas emitidas para los ciudadanos.

En el presente caso el número de identificación del acta de nacimiento no es un requisito indispensable para poder celebrar contratos de servicios profesionales, en su caso, de adquisición de bienes o prestación de servicios con el Instituto Electoral del Estado de México, por lo que en consideración el número de acta de nacimiento es un dato personal confidencial, que en el mismo supuesto y atendiendo al principio de finalidad, procede su eliminación de los contratos.

3. Lugar de Nacimiento

Es aquel dato establecido en el acta de nacimiento, conteniendo otros datos innatos a los ciudadanos.

Dicho dato se establece de acuerdo a la división territorial de cada entidad federativa, municipio o localidad.

Con lo anterior podemos decir que el lugar de nacimiento es un antecedente mediante el cual acredita la fuente del ciudadano; por lo que establecido lo anterior es un dato personal confidencial, que de igual forma y atendiendo al principio de finalidad, procede su eliminación de los contratos.

4. Edad

Elemento constitutivo del estado civil; en menor de edad y mayor de edad, influyendo sobre dos cualidades jurídicas, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio; mientras que la primera de ellas se refiere a los derechos y obligaciones que se adquieren antes de nacer, la segunda de ellas hace mención a los derechos y obligaciones que adquieren los individuos al cumplir cierta edad, en el Estado mexicano lo constituyen los 18 años, de conformidad al artículo 4.339 del Código Civil del Estado de México; siendo este el parámetro para adquirir la capacidad de ejercicio.

Al respecto de ello, la edad la forma el día en que una persona nace, sin contar las horas; siendo este dato cuantitativo la forma en la cual se determina la posibilidad de adquirir tanto derechos como obligaciones de acuerdo al artículo 4.340 del Código Civil del Estado de México.

De lo antes citado, podemos referir que la edad en un contrato, es un dato que hace a una persona identificable, que tiene como finalidad establecer que dicho sujeto puede adquirir derechos y obligaciones dentro de una sociedad.

En virtud de lo anterior podemos decir que, la edad es un dato inherente a la identidad de las personas, procediendo a su eliminación de las versiones públicas.

5. Registro Federal de Contribuyentes

Con fundamento en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el Registro Federal de Contribuyentes, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, por sus siglas en español SAT, es aquella obligación de declarar periódicamente las actividades laborales o empresariales que estos realicen, siendo obligados tanto las personas físicas como morales; los elementos para la expedición de dicho registro son: la Clave Única del Registro de Población, por sus siglas en español CURP; comprobante de domicilio e identificación oficial vigente; siendo válido para acreditar la identidad de las personas de conformidad a el artículo 2.5 fracción IV Código Civil del Estado de México.

Dicho registro se conforma de 13 dígitos dentro de los cuales contiene datos personales del contribuyente como son nombre, fecha de nacimiento y una homoclave, la cual es única para cada uno de los contribuyentes.

De lo anterior podemos decir que la función del Registro Federal de Contribuyentes en un contrato es de obtener la situación laboral tanto de personas físicas como jurídico colectivas, así como de conocer su domicilio de actividad laboral o en su caso empresarial; podemos concluir que dicho dato si es un requisito para la celebración de contratos.

Considerando lo anterior, el Registro Federal de Contribuyentes es un documento del cual se desprenden datos inherentes a la identidad de las personas, procediendo a la eliminación de las versiones públicas.

6. Número y/o clave de la credencial para votar.

El número y/o la clave de la credencial para votar, se encuentra en los contratos, para referir el documento con el cual el contratante se identifica o acredita su identidad en el acto jurídico a que hemos hecho referencia, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.5 Bis, fracción II del Código Civil del Estado de México.

Este dato se asigna a partir de la expedición de la credencial para votar, por lo que conviene destacar que la responsabilidad de formar el Padrón Electoral y expedir

la credencial de referencia, corresponde a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 54, apartado 1, incisos b) y c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Es de señalar además, que el artículo 126, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto Nacional Electoral fuese parte o en su caso, para cumplir con obligaciones previstas por esta Ley, aquellas en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.

De manera particular, el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que la credencial para votar deberá contener diversos datos personales, tales como entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio, sección electoral, nombre completo, domicilio y clave de registro, entre otros.

En este sentido, el número y/o la clave de la credencial para votar hace a su titular identificado e identificable, pues se asigna a cada persona inscrita en el Padrón Electoral y es único e irrepetible. Este dato además por sí solo es de suma relevancia ya que aparte de ser utilizado por sus titulares para actividades políticas o electorales, también es utilizado para trámites administrativos oficiales y particulares.

De este modo, basados en el principio de finalidad es dable concluir que el número de la credencial para votar o su clave, son datos personales confidenciales, que no deben hacerse públicos por lo que procede su eliminación de los contratos.

7. Número de Pasaporte.

Este documento de igual forma aparece en los contratos para hacer referencia al documento con el que el contratante acreditó su identidad, toda vez que es considerado por el Código Civil del Estado de México, en su artículo 2.5 Bis, fracción II, como un medio aceptable y válido para ello.

De conformidad con lo señalado en el artículo 2º fracción V, del Reglamento de Pasaportes, esta identificación es el documento que la Secretaría de Relaciones

Exteriores expide a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades extranjeras permitan el libre paso; sin embargo, para el caso que nos ocupa y como se ha referido, el número del pasaporte de personas físicas obra en los contratos únicamente con el objetivo de acreditar su identidad.

Es por lo anterior y en apego al principio de finalidad que se trata de un dato personal confidencial, que debe eliminarse de las versiones públicas de los contratos a publicar en el Ipomex, ya que para este Instituto es irrelevante conocer si una persona cuenta con el documento necesario para salir del país, ni en su caso el número de salidas que tenga o sus destinos.

8. Cedula Profesional

El número de cedula profesional, dicho número progresivo se expide al concluir una licenciatura o bien una ingeniería el cual es expedido por la Secretaria de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones, sirviendo este como documento para avalar la identidad de conformidad con el precepto 2.5 Bis fracción III del Código Civil del Estado de México.

La cedula profesional es aquel documento mediante el cual una persona que ha concluido alguna de las licenciaturas o ingenierías aceptadas por la Secretaria de Educación Pública, acredita tener los conocimientos técnicos para poder ejercer en la licenciatura o ingeniería; así mismo avala también pos grados como lo son la especialidad, maestría o doctorado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General para el ejercicio de las Profesiones.

En la presente instancia el número de cedula profesional, si bien es un requisito para acreditar que se tienen conocimientos técnicos, lo cierto es que no es un requisito para poder celebrar los contratos con instituciones públicas o privadas mediante licitaciones, en el presente caso con el Instituto Electoral del Estado de México; por lo que considerando lo anterior el número de cedula profesional es un dato personal confidencial y que, atendiendo el principio de finalidad procede a su eliminación en los contratos.

9. Número de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

La cartilla de identidad del servicio militar nacional, también es un documento que sirve para acreditar la identidad, en términos de lo señalado en el artículo 2.5 Bis, fracción III del Código Civil del Estado de México, motivo por el cual el número se insertó en los contratos para acreditar la identidad.

Ahora bien, cumplir con el Servicio Militar Nacional, es una obligación para los mexicanos por nacimiento o por naturalización que cumplan los 18 años, se prestará en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con las capacidades y aptitudes de cada mexicano que deba realizarlo. Esta obligación tiene sustento legal en el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley del Servicio Militar y su Reglamento.

Cuando se cumple con este servicio obligatorio, se debe tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional –SEDENA- la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, este documento además de contener datos personales de su titular, tiene un número único e irrepetible que asigna la SEDENA para identificar a la persona que ya cumplió con este servicio militar.

Para el caso que nos ocupa, haber cumplido con el servicio militar no es un requisito para poder celebrar contratos de servicios profesionales y mucho menos de adquisición de bienes o prestación de servicios con el Instituto Electoral del Estado de México, por lo que el número de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar es un dato personal confidencial, que de igual forma y atendiendo al principio de finalidad, procede su eliminación de los contratos.

10. Domicilio.

Al respecto del domicilio y de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.3 y 2.5 fracción V, así como 2.17 del Código Civil del Estado de México, el domicilio es un atributo de la personalidad, que permite la localización de las personas físicas y se identifica como el lugar donde reside un individuo con el propósito de establecerse en él; a falta de este, se entiende como domicilio el lugar en el que tiene el principal asiento de sus negocios y a falta de uno y otro el lugar en que se encuentre.

De lo anterior, podemos inferir que la finalidad del domicilio en los contratos es obtener la ubicación presencial de un individuo; por ello, es un dato personal, toda vez que lo hace identificable y su publicidad puede afectar la esfera de derechos más próxima de la persona de que se trate, pues dar publicidad al domicilio podría propiciar que las personas fueran molestadas en este, por temas incompatibles con la finalidad de la recolección original; en este orden de ideas, se debe eliminar de los contratos.

Por tanto, el domicilio, es un dato personal que debe ser resguardado, por ser inherente a atributos de la personalidad y procede su clasificación como información confidencial, así como su eliminación en las versiones públicas.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 3°, fracción IX y 143, fracción I de la Ley de Transparencia del Estado, en relación con el Trigésimo octavo de los Lineamientos de Clasificación, procede eliminar de los contratos el domicilio y en su caso número y/o clave de la credencial para votar, número del pasaporte y número de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional; asimismo, las versiones públicas de los contratos que se publiquen en el Ipomex, deberán ser elaboradas de conformidad con lo previsto en los artículos Noveno, Quincuagésimo Séptimo, Quincuagésimo Octavo y Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales de Clasificación.

ACUERDO

PRIMERO. Este Comité de Transparencia, confirma la clasificación de los datos personales identificados como nacionalidad, número de acta de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, domicilio y en su caso número y/o clave de la credencial para votar, número del pasaporte y número de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, con fundamento en los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y 143, fracción I de la Ley de Transparencia del Estado, en relación con el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales de Clasificación.

Asimismo, se aprueba la publicación en el Ipomex, de las versiones públicas de los contratos de servicios profesionales, de adquisición de bienes o prestación de servicios, celebrados por este Instituto, para dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia del artículo 92, fracciones XI y XXIX de la Ley de Transparencia del Estado, de conformidad con lo solicitado por el Servidor Público Habilitado de la Dirección de Administración.

SEGUNDO. La Unidad de Transparencia hará del conocimiento del Servidor Público Habilitado de la Dirección de Administración el presente Acuerdo de clasificación, para que lleve a cabo la publicación de las versiones públicas correspondientes en el IPOMEX.

Así, lo dictaminaron por unanimidad de votos los Integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de México, en su Décima Octava

Sesión Extraordinaria del 12 de septiembre de 2017 y cierran su actuación, firmando al calce para constancia legal.-----

Mtro. Francisco Javier López Corral
Presidente del Comité de Transparencia y
Titular de la Unidad de Transparencia



Mtra. Lilibeth Álvarez Rodríguez
Integrante del Comité de Transparencia



Mtro. Jesús Antonio Tobías Cruz
Contralor General e
Integrante del Comité de Transparencia



Lic. Luis Enrique Fuentes Tavira
Subdirector de Datos Personales,
Transparencia y Acceso a la Información

